



**APRUEBA NORMAS QUE REGULAN LAS
CONDICIONES DE MÁXIMA SEGURIDAD EN
DEPENDENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE SISTEMA CERRADO**

[Handwritten signatures and initials]
SUP/INT/PG/LGB/CGG/WBM/JEA/ptk

N° 7628 /EXENTA

SANTIAGO, 09 NOV 2023

Hoy se resolvió lo que sigue:

VISTOS:

Lo dispuesto en: **1)** El D.F.L. N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; **2)** La Ley N° 19.696, que Establece Código Procesal Penal; **3)** Las disposiciones contenidas en el Código Penal; **4)** El D.L. N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; **5)** El D.S. N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; **6)** La Ley N° 19.880, de 2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; **7)** La Ley N° 20.609, Establece Medidas contra la Discriminación; **8)** La Resolución Exenta N° 2.854, de 05 de Noviembre de 1993, que Aprueba Organización Administrativa de los Establecimientos Penitenciarios; **9)** La Resolución Exenta N° 4.478, de fecha 08 de mayo de 2012, del Director Nacional, que Establece Organización Interna de Gendarmería de Chile y sus modificaciones posteriores; **10)** El Decreto N° 369, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Aprueba Política Nacional contra el Crimen Organizado; **11)** La Resolución Exenta N° 5.055, de fecha 06 de agosto de 2019, del Director Nacional, que Aprueba Procedimientos Administrativos de Traslado de Personas Privadas de Libertad y Deja Sin Efecto Disposiciones y Actos Administrativos que Indica y sus modificaciones contenidas en la Resolución Exenta N° 5716 de 20 de noviembre del 2020; **12)** La Resolución Exenta N° 7.297, de fecha 12 de agosto de 2013, del Director Nacional, que Delega Facultades de Disponer Traslados de Personas Privadas de Libertad en el Subdirector Operativo y en los Directores Regionales del Servicio, y Modifica y Deja Sin Efecto Resoluciones que Indica; **13)** Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, Adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977 y Resolución 70/175 aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015; **14)** El Decreto N° 873, de fecha 05 de enero de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Aprueba Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica"; **15)** La Resolución Exenta N° 6.371 de fecha 30 de

junio de 2014 que Aprueba la Clasificación de Unidades Penales; **16)** Lo dispuesto en las Resoluciones N°s 6 y 7, de 2019 que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por objeto atender, custodiar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad.

SEGUNDO: Que, al Servicio le corresponde dirigir los establecimientos penitenciarios del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario y velar por la seguridad interior de ellos.

TERCERO: Que, en el ejercicio de la actividad penitenciaria y en la ejecución de sanciones penales, la Administración Penitenciaria debe tener en cuenta las necesidades individuales y colectivas de las personas privadas de libertad, no pudiendo establecer, en ningún caso, distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones carentes de justificación razonable, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

CUARTO: Que, la Administración Penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, permitiendo el ejercicio de sus derechos que sean compatibles con su situación procesal, no pudiendo, en consecuencia, ser sometidas a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas que regulan la ejecución de la privación de libertad.

QUINTO: Que, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, ha definido a este como “el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización”.

SEXTO: Que, el objetivo de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado es “disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que tienen un rol en la prevención, control y persecución de esta”, estableciendo como uno de sus ejes el “prevenir y neutralizar la operación del crimen organizado en recintos penitenciarios, el reclutamiento de nuevos integrantes, así como el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad”.

SÉPTIMO: Que, los establecimientos penitenciarios, de acuerdo a su tipo, deben organizarse sobre la base de una ordenación adecuada de la convivencia de las personas privadas de libertad, basada en el respeto de los derechos y la exigencia de los deberes de cada persona y un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de éstas, de los/as funcionarios/as, de los recintos penales y de toda persona

que en el ejercicio de un cargo o en uso de una facultad legal o reglamentaria ingrese a ellos.

OCTAVO: Que, los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado se rigen por los principios de seguridad, orden y disciplina, los cuales deben armonizarse, en su caso, con la exigencia de que no impidan las tareas de tratamiento de las personas.

NOVENO: Que, a la Jefatura Nacional del Servicio le corresponde disponer el traslado de las personas privadas de libertad, recabando la autorización judicial correspondiente en el caso de las personas sujetas a la medida cautelar personal de prisión preventiva, la cual se encuentra delegada en los/as Directores/as Regionales y Subdirector/a Operativo, según corresponda.

DÉCIMO: Que, a la jefatura de un establecimiento penitenciario le corresponde la conducción administrativa, técnica y operativa de éste.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en el ejercicio de sus funciones, el/la Alcaide, tiene la atribución de adecuar el régimen interno del respectivo recinto penal, pudiendo establecer, sistemas diferenciados, según las características y segmentación de la población penal.

A su vez, deberá cuidar especialmente la aplicación de los principios, normas y procedimientos relativos a la seguridad, régimen interno, clasificación, acceso a actividades de reinserción social y segmentación de la población penal, entre otras.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado, pueden contar con dependencias que reúnan las características de seguridad y operatividad necesarias para albergar a personas privadas de libertad que requieran un mayor nivel de vigilancia y control.

DÉCIMO TERCERO: Que, la Administración Penitenciaria en el ejercicio de sus funciones, y teniendo presente que en la actualidad se ha producido un aumento de la violencia en la comisión de hechos que revisten caracteres de delitos, la estructuración creciente de asociaciones delictivas y criminales en el país, las características particulares de las personas privadas de libertad, entre otros aspectos, hace necesario disponer de dependencias que permitan una mayor vigilancia, observación y control de éstas, con el objeto de garantizar el estricto cumplimiento de la condena o de la medida cautelar personal de prisión preventiva y disminuir los factores de riesgo que afecten la seguridad de los establecimientos penales, de las personas privadas de libertad, funcionarios/as y de la sociedad en general.

He determinado dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- **APRUÉBANSE** las siguientes normas que regulan las condiciones de máxima seguridad en dependencias de establecimientos penitenciarios del sistema cerrado:

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Régimen penitenciario. Es el conjunto de normas y medidas destinadas a mantener una convivencia pacífica, segura y ordenada de las personas que, por resolución del tribunal competente, ingresen a los establecimientos penitenciarios administrados por Gendarmería de Chile, cumplir los fines previstos en la ley procesal para los detenidos y sujetos a prisión preventiva, y llevar a cabo las actividades y acciones para la reinserción social de las personas condenadas.

Artículo 2º.- Régimen interno. Es el conjunto de normas y medidas que regulan las actividades al interior de los establecimientos penitenciarios, que corresponden principalmente a labores de control y vigilancia, de manera tal de facilitar la realización de las actividades de asistencia y reinserción social de las personas privadas de libertad, con el objeto de mantener el normal funcionamiento del recinto penal.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación. El ingreso o traslado de una persona condenada o imputada a dependencias con condiciones de máxima seguridad es de carácter excepcional y se llevará a cabo cuando existan antecedentes que permitan a la Administración Penitenciaria, presumir fundadamente, que la persona condenada o imputada podría seguir delinquirando desde y al interior del establecimiento penitenciario, o que podría constituir, dirigir o reorganizar al interior de éste, asociaciones u organizaciones delictivas o criminales, o vincularse con las mismas para planificar, coordinar o ejecutar hechos delictivos o criminales.

Para dichos efectos se considerará la naturaleza, circunstancias, connotación y trascendencia de los crímenes y simples delitos por los cuales ha sido condenada o formalizada la persona privada de libertad.

Lo anterior será verificado con los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización o en la sentencia condenatoria, o los recabados por la Administración Penitenciaria.

Artículo 4º.- De las condiciones de Máxima Seguridad. Las dependencias de un establecimiento penitenciario con condiciones de máxima seguridad, se caracterizan porque el cumplimiento de la pena privativa de libertad y, excepcionalmente de la medida cautelar de prisión preventiva, se organiza en torno a mayores medidas de seguridad, vigilancia y control por parte de la Administración Penitenciaria, observándose las normas de trato humano establecidas en el Reglamento de Establecimientos

Penitenciarios y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile actualmente vigentes.

Artículo 5°.- Finalidad de la reclusión en dependencias con condiciones de máxima seguridad. El ingreso o traslado de una persona privada de libertad a dependencias de máxima seguridad, tiene por finalidad cautelar la seguridad del régimen interno o de terceros, evitando que la persona privada de libertad pueda seguir delinquirando desde y al interior del establecimiento penitenciario, o constituir, dirigir o reorganizar al interior de éste asociaciones delictivas o criminales, o vincularse con las mismas para planificar o ejecutar hechos delictivos.

Artículo 6°.- Informe técnico penitenciario. La resolución que ordene el traslado o ingreso de una persona privada de libertad a una dependencia de máxima seguridad deberá estar precedida de un informe técnico que dé cuenta de las presunciones fundadas, consideraciones y/o antecedentes referidos en el artículo 3°, elaborado por la instancia local, regional o nacional encargada de la investigación y/o análisis de información relevante para el normal funcionamiento del Servicio.

TÍTULO I

DEL INGRESO O TRASLADO A DEPENDENCIAS DE MÁXIMA SEGURIDAD.

Artículo 7°.- Autoridad competente para disponer el ingreso o traslado. La Jefatura de la Subdirección Operativa o de la Dirección Regional respectiva, según corresponda, dispondrá el traslado o ingreso de una o más personas privadas de libertad a dependencias de máxima seguridad, mediante resolución fundada en el informe a que se refiere el artículo anterior.

En el caso de las personas imputadas sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva, se deberá comunicar al Juzgado de Garantía competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Procesal Penal.

Artículo 8°.- Facultad de segmentación de la Jefatura de establecimiento penitenciario. La Jefatura de un establecimiento penitenciario que disponga de dependencias de máxima seguridad, podrá, en el ejercicio de su facultad de segmentación de la población penal, reubicar a una persona en dichas dependencias, decisión que deberá ser fundada en antecedentes técnico penitenciarios, refrendada por el Consejo Técnico, revisada cada seis meses y de acuerdo a lo señalado en el artículo 10° de la presente Resolución.

Artículo 9°.- Permanencia en una dependencia de máxima seguridad. La permanencia de una persona privada de libertad en dependencias de máxima seguridad será revisada por el Consejo Técnico, cada seis meses, contados desde su ingreso.

Si el Consejo Técnico acuerda la confirmación de la permanencia en estas dependencias de una persona en prisión preventiva, la Jefatura del establecimiento penitenciario deberá informar inmediatamente al tribunal que decretó la medida cautelar, con el objeto que éste se pronuncie de conformidad a la ley procesal penal.

Si el Consejo Técnico acuerda el cese de la internación en estas dependencias de una persona en prisión preventiva, la Jefatura del recinto penal remitirá los antecedentes a la Dirección Regional respectiva o Subdirección Operativa, según corresponda, para que se pronuncie fundadamente sobre su reubicación en otra dependencia del establecimiento penitenciario, su traslado a un nuevo recinto penal de destino o su continuidad en las dependencias de máxima seguridad, informando a la autoridad judicial competente.

En el caso de las personas condenadas, el Consejo Técnico informará a la Dirección Regional respectiva o Subdirección Operativa, según corresponda, el acuerdo adoptado respecto al cese o confirmación de la permanencia en dependencias de máxima seguridad, a fin que la autoridad determine fundadamente sobre su permanencia en éstas. Si se determina el cese, la persona será derivada a otra dependencia del recinto penal u otro establecimiento penitenciario de destino.

La Dirección Regional respectiva o la Subdirección Operativa, según corresponda, deberá pronunciarse sobre el cese o confirmación de la permanencia en dependencias de máxima seguridad, dentro del plazo de cinco días, contados desde la recepción de los antecedentes remitidos por la jefatura del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluida la persona privada de libertad.

Artículo 10°.- Revisión permanencia en dependencias de máxima seguridad. Para efectos de la revisión a que se refiere el artículo anterior, el Consejo Técnico también tendrá en cuenta, a lo menos:

- a. Los antecedentes que motivaron el traslado, ingreso o reubicación en dependencias de máxima seguridad.
- b. El estado de salud de la persona privada de libertad.
- c. El nivel de sobrepoblación de las dependencias de máxima seguridad.
- d. Grado de adhesión al régimen penitenciario.
- e. Cualquier otro antecedente que permita ponderar la necesidad de mantener o poner término a la permanencia de la persona privada de libertad en dependencias de máxima seguridad, de conformidad con las finalidades establecidas en el artículo 5° de la presente Resolución.

Los acuerdos del Consejo Técnico se adoptarán por la mayoría de votos, consignándose las opiniones disidentes y sus fundamentos en el acta de la sesión.

La sesión de Consejo para revisar la permanencia en dependencias de máxima seguridad, se efectuará antes de los quince días hábiles anteriores al cumplimiento del plazo de seis meses señalados en el artículo anterior, contados desde la notificación del resultado de la revisión anterior, o desde el primer ingreso a las dependencias de máxima seguridad, debiendo la jefatura del establecimiento penitenciario remitir los antecedentes a la autoridad competente, dentro de los cinco días siguientes a la respectiva sesión del Consejo Técnico.

Con todo, antes del cumplimiento del plazo establecido en el inciso primero del artículo anterior, la Jefatura del establecimiento penitenciario podrá convocar fundadamente al Consejo Técnico a una sesión extraordinaria, a fin de revisar la permanencia de la persona privada de libertad en las dependencias de máxima seguridad.

TÍTULO II

DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL REGIMEN PENITENCIARIO EN DEPENDENCIAS DE MÁXIMA SEGURIDAD

Artículo 11.- Régimen penitenciario aplicable en dependencias de máxima seguridad. El régimen penitenciario aplicable en dependencias de máxima seguridad, se ajustará a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en el presente Título y en los demás actos administrativos que regulen la materia.

Artículo 12.- De las actividades y acciones destinadas a la reinserción social. Las Unidades Técnicas Locales de los establecimientos penitenciarios que dispongan de dependencias de máxima seguridad, otorgarán a las personas en prisión preventiva y condenadas, determinadas prestaciones con el objeto de facilitar el ejercicio de los derechos que no se encuentren restringidos a consecuencia de la privación de libertad y, además, facilitar y apoyar el proceso de reinserción social de las personas condenadas.

En la programación de las actividades y acciones que llevan a cabo las Unidades Técnicas Locales, se deberá considerar, entre otros aspectos, la existencia de espacios para el desarrollo de éstas, y la capacidad del recinto penal.

En los establecimientos penitenciarios concesionados que cuenten con dependencias de máxima seguridad, las prestaciones destinadas a la garantía de derechos y de reinserción social, se regirán de conformidad a lo establecido en el contrato de concesión respectivo.

Artículo 13.- Actividades de régimen interno. La Administración Penitenciaria podrá, con el objeto de resguardar la seguridad del respectivo establecimiento penal, de las personas privadas de libertad y de las que laboren en éste, establecer ciertas restricciones en el ejercicio de determinadas actividades y mayores medidas de control y vigilancia.

Artículo 14.- Visitas. Las visitas en dependencias de máxima seguridad, se realizarán de conformidad a lo establecido en el párrafo 6º, del Título III, del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, tomando en consideración los espacios destinados al efecto según la infraestructura de cada dependencia y las medidas de vigilancia y control adoptadas por la Administración Penitenciaria en razón de la finalidad de la reclusión en este tipo de dependencias.

Artículo 15.- De las horas de patio con luz natural e interacción con otras personas. Las personas privadas de libertad en dependencias de máxima seguridad, tendrán acceso, dentro de la jornada diaria, a lo menos a dos horas y quince minutos de patio con acceso a luz natural, pudiendo interactuar con otras personas privadas de libertad

que determine la Administración Penitenciaria y sin perjuicio de las otras actividades que lleven a cabo durante la jornada diaria.

Artículo 16.- La Jefatura Regional respectiva deberá, mediante resolución fundada, regular la organización y funcionamiento de las dependencias de máxima seguridad en los establecimientos penitenciarios que se ubiquen dentro de su jurisdicción, dentro del plazo de tres meses contados desde la dictación de los lineamientos operativos y de reinserción social emanados de la Dirección Nacional, los que deberán establecerse en el plazo de dos meses contados desde la dictación del presente acto administrativo. Para estos efectos, se conformará una mesa de trabajo coordinada por la Subdirección Operativa, e integrada por representantes de la Subdirección Operativa, Subdirección de Reinserción Social y Unidad de Fiscalía.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



Exp N°: 380569/2023

N° 7628 Mat. Aprueba Normas que Regulan las Condiciones de Máxima Seguridad en Dependencias de Establecimientos Penitenciarios de Régimen Cerrado.

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirecciones.
- Direcciones Regionales.
- Establecimientos Penitenciarios de Régimen Cerrado
- Ayudantía Dirección Nacional.
- Oficina Nacional de Gestión Documental.
- Unidad de Fiscalía. (ingreso 7333-2023)